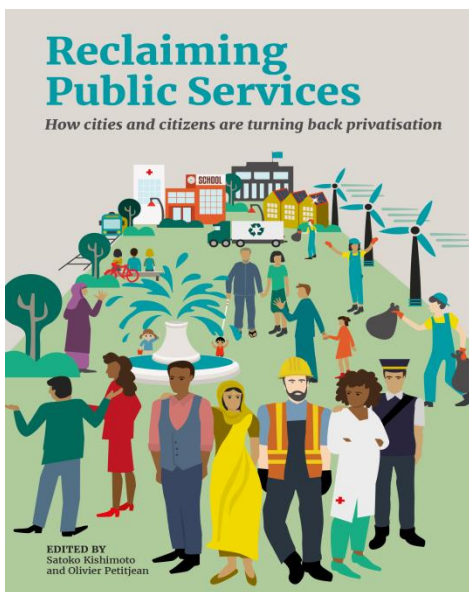


Informe de prensa - 23 de junio de 2017

La recuperación de los servicios públicos: cómo ciudades y ciudadanía están acabando con las privatizaciones

¿Por qué hay comunidades de todo el mundo que están recuperando servicios básicos que antes gestionaban operadores privados y volviendo a situarlos en el ámbito de lo público? Este tipo de iniciativas —de lo que se conoce como “remunicipalización”, es decir, la recuperación de servicios desde el ámbito municipal o local— responden a muchos y diversos motivos: el objetivo de acabar con las prácticas abusivas o el incumplimiento de las normas laborales por parte del sector privado, el deseo de reconquistar el control de la economía y los recursos locales, el afán de ofrecer a las personas unos servicios asequibles, o la intención de poner en práctica unas estrategias ambiciosas a favor del medioambiente o de la transición energética, por citar algunos.

En los últimos años se han producido al menos 835 casos de (re)municipalización^[1] de los servicios públicos en todo el mundo, que afectan a más de 1600 ciudades en 45 países. Las remunicipalizaciones están ganando terreno tanto en ciudades pequeñas como en grandes capitales, siguiendo distintos modelos de titularidad pública y con distintos niveles de implicación por parte de la ciudadanía y la propia plantilla del servicio. Sin embargo, pese a la gran pluralidad de experiencias, se puede dibujar un panorama con un denominador común: es posible recuperar o construir unos servicios públicos eficaces, democráticos y asequibles. El constante deterioro de la calidad de los servicios y el incremento de los precios no es algo inevitable. Por ese motivo, cada vez son más las comunidades y las ciudades que están acabando con las privatizaciones y volviendo a poner en manos públicas servicios esenciales.



www.tni.org/reclaiming-public-services

10 experiencias de (re)municipalización de servicios

1. Oslo, Noruega: del incumplimiento de los derechos laborales a un mejor empleo con prestaciones para el personal de la recogida de residuos

En 2017, el Ayuntamiento de Oslo retomó el control público de los servicios de recogida de residuos, que durante 20 años habían funcionado a través de un sistema de licitaciones por concurso. Veireno, el último proveedor del servicio, muy pronto se convirtió en un símbolo del fracaso de este tipo de sistema.

El Ayuntamiento recibió decenas de miles de reclamaciones de ciudadanos que se quejaban de que no se había pasado a recoger su basura entre octubre de 2016 —cuando Veireno había ganado el concurso para encargarse de este servicio— y febrero de 2017. El Organismo Noruego de Inspección del Trabajo examinó a la compañía y se

encontró con que algunos de los empleados trabajaban hasta 90 horas por semana. Era evidente que el bajo coste de los servicios de Veireno se estaba consiguiendo a expensas de las condiciones laborales. El 1 de enero de 2017, la compañía se declaró en bancarrota y se desvinculó de toda responsabilidad, incluido el pago de los salarios. En febrero de 2017, la ciudad de Oslo remunicipalizó la recogida de residuos, se hizo cargo de los activos de Veireno y contrató a los 170 trabajadores y trabajadoras que antes habían formado la plantilla del operador privado. Se prevé que la adquisición sea costosa, ya que algunas de las personas que antes estaban contratadas a media jornada ahora trabajarán a jornada completa para el Ayuntamiento, con los salarios y los derechos de pensión correspondientes.

2. Delhi, India: la atención pública es la vía más eficaz para lograr un sistema universal de atención básica de la salud

En 2015, la administración del recién elegido Partido Aam Aadmi (AAP, o Partido del Hombre Común) inició el proceso de hacer realidad una de sus principales promesas electorales, la prestación de un servicio de salud asequible, estableciendo más de 1000 clínicas comunitarias (*mohalla*) en toda la ciudad de Delhi. Unos meses antes, el nuevo gobierno municipal había prometido destinar 2090 millones de rupias (31,4 millones de dólares estadounidenses) a esas 1000 clínicas.

En febrero de 2017, unas 110 clínicas estaban ya funcionando en algunas de las zonas más pobres de Delhi. Las clínicas son instaladas por el Departamento de Obras Públicas, con un coste aproximado de unos 2 millones de rupias (30 dólares) por clínica. Como son pequeñas y utilizan unas cabinas portátiles prefabricadas que se pueden instalar con mucha facilidad en prácticamente cualquier lugar, son mucho más baratas que los dispensarios del Gobierno (cada uno de los cuales cuesta unos 450 000 dólares). Cada clínica cuenta con una plantilla integrada por un médico, un enfermero, un farmacéutico y un técnico de laboratorio. Las consultas médicas, los medicamentos y las pruebas de laboratorio se ofrecen de forma totalmente gratuita, independientemente de la situación económica de los pacientes.

El gobierno de Delhi afirma que, desde que se empezaron a instalar estas clínicas, en la segunda mitad de 2015, más de 2,6 millones de los habitantes más pobres de la ciudad han recibido un servicio médico gratuito y de calidad. Hasta entonces, estas personas dependían de unas clínicas privadas muy caras o incluso de curanderos. El éxito de estas primeras clínicas supone que la promesa del Partido AAP de garantizar una atención básica de la salud gratuita a todos los habitantes de Delhi esté un poco más cerca de materializarse.

3. Grenoble, Briançon, Niza: los paladines de la remunicipalización en los Alpes franceses

Grenoble es una de la ciudades que está resuelta a remunicipalizar y desarrollar unos servicios públicos locales democráticos y sostenibles. La ciudad fue una pionera de la remunicipalización del agua a principios de la década de 2000, cuando rescindió un contrato fraudulento con la multinacional Suez (ahora Engie). En su lugar, Grenoble creó un nuevo operador público que suministra un agua de mejor calidad a un coste menor, y cuyo funcionamiento cuenta con la participación de la ciudadanía. Ahora la ciudad se está planteando remunicipalizar el servicio eléctrico, que incluiría la calefacción de lugares públicos y el alumbrado público, en un intento por luchar contra la pobreza energética y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Para ello, debe adquirir las acciones de Engie en la empresa eléctrica local, lo cual también suscita cuestiones complejas en materia laboral.

La ciudad también ha empezado a trabajar en el ambicioso objetivo de ofrecer comida 100 % local y ecológica en los comedores de las escuelas. Todas estas políticas se están desarrollando en un contexto de drásticos recortes de los recursos, derivados de las medidas de austeridad adoptadas por el Gobierno central francés.

Otras ciudades francesas, en especial en la región de los Alpes, también están promoviendo servicios públicos locales y la remunicipalización en varios sectores. Briançon, por ejemplo, ha remunicipalizado los servicios de agua y residuos, y ahora persigue el objetivo de “residuos cero”. La ciudad también está desarrollando un sector local para la energía pública. En el extremo sur de los Alpes franceses, la aglomeración de Niza —pese a estar gobernada por una administración conservadora— ha remunicipalizado los servicios de agua y saneamiento, el transporte público y los comedores escolares, así como un festival cultural y un mercado.

4. Hamburgo, Alemania: una nueva empresa local de energía recupera la red eléctrica

A principios del siglo XX, la ciudad de Hamburgo vendió a un grupo de inversores privados las acciones que poseía en la empresa local de electricidad, calefacción urbana y gas. En 2009, un Gobierno liderado por los conservadores y los verdes creó una nueva empresa pública, llamada Hamburg Energie, con el objetivo de construir instalaciones para

generar energía renovable y vender la electricidad producida.

Una vez establecida, la empresa consiguió aumentar con gran eficacia la cuota total de energías renovables. A fines de 2015, se habían instalado más de 13 megavatios de energía eólica y se había puesto en marcha un programa de energía solar de 10 megavatios en el que participaban como inversores ciudadanos y empresas locales. La empresa atrajo a más de 100 000 clientes que buscaban una energía renovable y producida localmente.

Cuando el gobierno socialdemócrata que subió al poder en 2011 manifestó que entre sus planes no estaba remunicipalizar las redes energéticas en un momento en el que estaban a punto de vencer las concesiones, se creó una amplia coalición popular para impulsar al gobierno en esa dirección. La coalición organizó un referendo cuyo resultado sería vinculante con el fin de obligar al gobierno a recuperar las redes de energía (electricidad, calefacción urbana y gas) y crear una empresa que respetara las demandas sociales y ecológicas.

Esta opción se alzó con una escasa mayoría en el referendo que organizó la ciudad en 2013. La red eléctrica se volvió a adquirir en 2015 y se prevé que en 2018-2019 se remunicipalice la red de gas. Pese a los temores de los sindicatos, las condiciones laborales no se han deteriorado y se han creado empleos.

5. Argentina: los servicios postales públicos superan a los privados en calidad, cobertura y precio

El servicio postal de Argentina, Correo Argentino (CORASA), fue el primer servicio público que se desprivatizó durante el Gobierno del presidente Néstor Kirchner. CORASA fue privatizada en 1997 y el Grupo Macri, uno de los grupos económicos más importantes de Argentina, se hizo con el control del sector al obtener una concesión de 30 años como proveedor. Las condiciones del contrato estipulaban que el Grupo Macri abonaría al Estado un canon anual por la gestión del servicio y que mantendría a toda la plantilla. A cambio, el Estado le seguiría garantizando a la compañía una subvención regional para ayudarle a asumir las pérdidas por operar en zonas remotas del país.

Apenas dos años después de que se firmara la concesión, en 1999, el Grupo Macri dejó de pagar al Gobierno los cánones que le correspondían. Mientras estuvo en vigor la concesión, la calidad del servicio siguió siendo baja, las rutas rurales estuvieron mal atendidas y los precios aumentaron varias veces. Seis años después, el Gobierno rescindió la concesión al Grupo Macri y renacionalizó el servicio postal.

Aunque el servicio postal se vio aquejado por graves pérdidas durante la privatización, el Gobierno de Kirchner logró mejorar la prestación del servicio y volver a priorizar las rutas rurales que habían sido desatendidas por el Grupo Macri. Además, el Gobierno redujo el coste del servicio postal y aumentó su fiabilidad y los mecanismos de rendición de cuentas.

6. Barcelona, Estado español: la reorganización de los servicios públicos en pro del interés general

Desde que la coalición progresista Barcelona en Comú subió al poder en la capital catalana, la ciudad ha puesto en marcha una amplia política para remunicipalizar servicios que hasta ahora estaban externalizados y crear nuevos servicios públicos. Barcelona ya ha remunicipalizado los servicios de prevención de la violencia de género y tres jardines de infancia, y ha establecido una nueva empresa municipal de servicios funerarios. Hace poco, la ciudad estableció un nuevo proveedor público de electricidad a partir de una empresa municipal existente, que suministrará energía a un precio asequible y transparente, a diferencia de los proveedores privados de energía que imponen a sus clientes precios cada vez más altos.

Además, después de que el Ayuntamiento aprobara una moción en diciembre de 2016, Barcelona se plantea ahora municipalizar el servicio de agua. Esto significaría prescindir de la compañía privada Agbar (Aguas de Barcelona), una filial de la multinacional Suez, que ha gestionado el agua de la ciudad desde el siglo XIX. La ciudad ha creado una asociación que trabaja a favor de la gestión pública del agua junto con otras ciudades catalanas que han remunicipalizado el agua o que están estudiando esta posibilidad. Con la ayuda del operador francés Eau de Paris, una empresa también remunicipalizada, Barcelona preparará los informes necesarios para la transición a una gestión pública del agua. Al igual que otras ciudades de Cataluña y del resto del Estado español, Barcelona está llevando adelante las (re)municipalizaciones a pesar de la oposición activa del Gobierno central en Madrid y de una serie de leyes españolas que imponen medidas de austeridad a las autoridades locales.

7. De Hamilton a Port Hardy, Canadá: los beneficios ambientales y económicos de recuperar el control del servicio

de agua

En 1994, la ciudad de Hamilton, en la provincia de Ontario, aprobó una asociación público-privada de diez años para la gestión y el mantenimiento de sus plantas de tratamiento de agua y aguas residuales que no se sometió a ningún concurso público. Los repetidos problemas con las fugas de aguas residuales generaron conflictos entre el operador privado y la ciudad. Mientras el servicio funcionó con el modelo privado, se recortó la plantilla y la ciudad se enfrentó a multas por las fugas de la planta de aguas residuales, ya que la forma en que estaba redactado el contrato protegía a la compañía privada.

En 2003, cuando el contrato estaba a punto de extinguirse, Hamilton inició un proceso de licitación para encontrar otro operador privado. Sin embargo, la movilización popular, acompañada de una oferta con un precio excesivo de American Water, filial de la multinacional RWE, bastó para bloquear que se renovara la concesión. En 2004, Hamilton anuló la convocatoria de propuestas y puso en marcha el proceso necesario para recuperar el control del servicio. La remunicipalización se tradujo muy pronto en un importante ahorro y en una mejora de las normas ambientales.

El ahorro de costes, la mejora de la calidad y la confianza en la capacidad del personal interno son temas recurrentes en las últimas remunicipalizaciones de servicios de agua y alcantarillado que se han producido en Canadá. Entre los numerosos ejemplos, cabe citar las ciudades de Banff, en Alberta, y de Sooke y Port Hardy, en la Columbia Británica. En Banff, un informe elaborado por el personal estimó que, con la gestión interna, la ciudad se ahorraría 350 000 dólares canadienses (235 000 euros) cada año. En Sooke, el Ayuntamiento decidió recuperar el sistema de aguas residuales en 2016, basándose en un informe del personal que calculaba que la gestión interna ahorraría a la comunidad unos 225 000 dólares (150 000 euros) cada año.

Leer más: Informe *Back in House* (2016) <http://www.civicgovernance.ca/back-in-house/>

8. Nottingham, Leeds y Bristol, Reino Unido: las nuevas empresas municipales de energía suman fuerzas para luchar contra la pobreza energética

El Ayuntamiento de Nottingham decidió crear una nueva empresa eléctrica en 2015, tras advertir que muchas familias de bajos ingresos tenían graves problemas para pagar las facturas de energía. Robin Hood Energy brinda un servicio más barato, ya que no extrae grandes beneficios ni confunde a los clientes con complicados paquetes de tarifas. La empresa, que ofrece los precios más baratos del Reino Unido, tiene como lema: “No tenemos accionistas privados, ni bonificaciones para la junta directiva. Solo precios claros y transparentes”.

Robin Hood Energy también ha creado alianzas con otras grandes ciudades. En 2016, la ciudad de Leeds creó la empresa municipal White Rose Energy para promover tarifas sencillas y sin fines de lucro en las regiones de Yorkshire y Humberside. En 2017, las ciudades de Bradford y Doncaster decidieron adherirse a la alianza White Rose/Robin Hood. En 2015, la ciudad de [Bristol](#), en el sur del Reino Unido, creó Bristol Energy, su propia empresa municipal de energía, junto con un ambicioso plan de eficiencia energética a nivel residencial, un programa de inversión en energías renovables y un programa de eficiencia energética en sus propios edificios y terrenos.

Por último, los y las activistas de la campaña [Switched on London](#) están presionando a la ciudad para que establezca una empresa energética sin fines de lucro y con una verdadera participación ciudadana. Los motivos que impulsan las iniciativas en estas distintas ciudades son parecidos: las empresas municipales jóvenes pueden acabar con la pobreza energética y, a la vez, desempeñar un papel clave para lograr una transición justa y renovable.

9. Vilnius, Lituania: la remunicipalización del sistema de calefacción urbana desencadena una demanda arbitral

En 2016, la multinacional francesa de la energía Veolia demandó al Gobierno de Lituania cuando la ciudad de Vilnius decidió no renovar el contrato de 15 años con su filial Vilniaus Energija y remunicipalizar la calefacción urbana. La multinacional recurrió al tratado bilateral de inversión (TBI) entre Francia y Lituania para iniciar un proceso de arbitraje internacional, presentando una demanda para la solución de controversias inversor-Estado (ISDS) por una supuesta “campaña de acoso” y la “expropiación” de sus inversiones. Además, según Veolia, la filial se vio obligada a cerrar una de sus centrales eléctricas cuando el Gobierno lituano anuló los subsidios para el uso de gas.

Pero según una investigación del ente regulador de la energía de Lituania, Vilniaus Energija había estado manipulado el precio del combustible destinado a la calefacción, con lo que había incrementado de forma considerable el coste de la energía pagado por los hogares y conseguido unas ganancias extraordinarias ilícitas de 24,3 millones de euros entre 2012 y 2014. A raíz de la creciente presión popular, el presunto fraude y la falta de transparencia financiera, la ciudad de Vilnius se negó a renovar el contrato con Vilniaus Energija, tras lo que Veolia exigió una indemnización de 100

millones de euros en concepto de daños. La demanda arbitral podría haber disuadido de su decisión inicial a la ciudad de Vilnius y a que mantuviera el contrato. Sin embargo, en 2017, las autoridades emprendieron las medidas necesarias para devolver a manos públicas el sistema de calefacción urbana. La demanda arbitral sigue en curso.

10. De la isla de Kauai a Boulder, Estados Unidos: el fin de las privatizaciones pone en marcha la democracia energética

Debido al coste de la importación de carbón, gas y otros recursos, la isla hawaiana de Kauai se ha enfrentado a una gran presión para encontrar fuentes alternativas de energía. En 2002, la Cooperativa de Servicios de la Isla de Kauai (KIUC) adquirió una compañía privada de energía de Connecticut que estaba vendiendo varias empresas de electricidad porque iba a pasar a dedicarse a las telecomunicaciones. De este modo, la KIUC se convirtió en la primera cooperativa de generación, transmisión y distribución sin fines de lucro del estado, bajo la titularidad y el control de los miembros a los que sirve. Esta empresa de propiedad local y controlada democráticamente proporciona un servicio eléctrico fiable y de bajo coste, y tiene por objetivo alcanzar una meta del 50 % de energía renovable para 2023. En 2016, la KIUC ya había alcanzado un nivel del 38 % de renovables.

En el continente, la ciudad de [Boulder](#) lleva desde 2010 librando una batalla por la democracia energética. En un primer momento, debido a la presión ciudadana, la ciudad intentó presionar a la empresa de propiedad privada que proporcionaba el servicio público, Xcel Energy, con el fin de que adoptara una transición radical hacia una energía baja en carbono. Finalmente, los impedimentos que puso Xcel llevaron a Boulder a aprobar una ordenanza por la que se creó una empresa eléctrica municipal en 2014, un objetivo que sigue impulsando pese a los retos jurídicos y a las campañas de desinformación de Xcel.

Los estudios demuestran que la titularidad local puede eliminar la dependencia del carbón, duplicar la producción de energías renovables y reducir a la mitad la cantidad de emisiones. Las ciudades estadounidenses están demostrando que el hecho de que Trump abandonara el Acuerdo de París sobre el cambio climático no está impidiendo el avance de las ciudades y la ciudadanía.

10 conclusiones fundamentales

1. Hay mejores soluciones que limitarse a apostar por incrementar las privatizaciones y la austeridad, y rebajar las expectativas

Miles de políticos, funcionarios públicos, trabajadores y sindicatos, y movimientos sociales están trabajando para reivindicar o crear servicios públicos eficaces que satisfagan las necesidades básicas de las personas y respondan a nuestros desafíos sociales, ambientales y climáticos. Normalmente, lo hacen en el ámbito local. Nuestro estudio demuestra que en los últimos años se han producido al menos 835 casos de (re)municipalización de los servicios públicos en todo el mundo, que afectan a más de 1600 ciudades en 45 países.

Contradiendo la narrativa predominante de que los servicios públicos son demasiado caros, las autoridades locales y los grupos ciudadanos están poniendo de manifiesto que la (re)municipalización y la (re)creación de unos servicios

públicos eficaces y asequibles es algo posible.



2. Las (re)municipalizaciones son algo más habitual de lo que se cree, y funcionan

La mayoría de las experiencias de remunicipalización las encontramos en los sectores de la energía (311 casos) y del agua (267 casos). En torno al 90 % de las (re)municipalizaciones en el sector de la energía tuvieron lugar en Alemania (284 casos), un país famoso por su ambiciosa política de transición energética (conocida como *Energiewende*). Las experiencias de remunicipalización del agua han tenido lugar sobre todo en Francia (106 casos), el país con la historia más larga de privatización en este sector y donde tienen su sede las grandes multinacionales Suez y Veolia.



En varios países, como Canadá, el Estado español y el Reino Unido, las autoridades locales han asumido el control de diversos servicios, como piscinas, comedores escolares, mantenimiento del espacio público, vivienda, limpieza y seguridad. En los sectores de la salud y la asistencia social, más de la mitad de los casos proceden de Noruega y otros

países escandinavos. Nuestro estudio abarca iniciativas (re)municipalizadoras entre 2000 y enero de 2017. En la primera mitad de este período (2000-2008), se han contado 137 casos y, en la segunda (2009-2017), 693 casos. Esto significa que, durante la segunda mitad de nuestro período de estudio, se produjeron cinco veces más (re)municipalizaciones que durante el primero. El año en que se registraron más casos, 97, fue en 2012; desde entonces, el número de experiencias se ha mantenido elevado.

3. La remunicipalización funciona como una respuesta local a la austeridad

El fenómeno de las remunicipalizaciones es especialmente dinámico en Europa; se encuentran ejemplos en todos los países europeos y en todos los sectores. Por ejemplo, se contaron 347 casos en Alemania, 152 en Francia, 64 en el Reino Unido y 56 en el Estado español.

El movimiento remunicipalizador en Europa se puede entender como una respuesta a las políticas de austeridad; una reacción frente a los excesos de la liberalización y el acaparamiento corporativo de servicios básicos. Sin embargo, esto no significa que la remunicipalización siempre esté muy politizada, ni que sea dominio de un único sector del espectro político. De hecho, vemos que las experiencias de remunicipalización están siendo impulsadas por grupos de todas las tendencias y que, por lo general, surgen de un un consenso local entre varios partidos. La fractura política en este ámbito muchas veces no se produce entre líneas partidarias, sino entre el nivel local, donde los políticos y los funcionarios deben lidiar con las necesidades cotidianas de la gente, y el nivel nacional y europeo, de donde nace la imposición de las medida de austeridad y los recortes presupuestarios.

4. La (re)municipalización es una estrategia clave para la transición energética y la democracia energética

La (re)municipalización no es solo una iniciativa que responde a inquietudes o dinámicas políticas locales sino que, muy a menudo, persigue también encontrar soluciones locales eficaces frente a desafíos mundiales como el cambio climático. El sector de la energía, sobre todo en Alemania, es un ejemplo de esta tendencia. De un total de 284 casos de (re)municipalización de la energía en el país, las ciudades rescindieron y retomaron el control de 166 concesiones privadas de la red de electricidad y/o gas y 9 concesiones de suministro de electricidad. Al mismo tiempo, se crearon 109 nuevas empresas municipales (93 de red de electricidad/gas y 16 de suministro).

Desde la época en que se liberalizó la energía, en la década de 1980, el mercado alemán ha estado dominado por las ‘Cuatro Grandes’ corporaciones energéticas. Cuando estos gigantes empresariales no lograron satisfacer las reivindicaciones públicas a favor de una transición hacia las energías renovables, las nuevas empresas públicas locales y remunicipalizadas, y las cooperativas ciudadanas, entraron en escena y tomaron la iniciativa. Este movimiento remunicipalizador ha ido creciendo en paralelo a la política de transición energética del país (*Energiewende*) y, acompañado de la promesa del Gobierno de que irá eliminando gradualmente la energía nuclear, ha cobrado un impulso considerable y ha alcanzado numerosas victorias en la transición a las energías renovables.

También en el Reino Unido, donde el mercado de la energía ha estado dominado tradicionalmente por las ‘Seis Grandes’, se están forjando nuevas experiencias. Cuatro nuevas empresas municipales de energía proporcionan electricidad a precios asequibles a sus comunidades, en especial a las familias de bajos ingresos y con dificultades para pagar las facturas. Al igual que Robin Hood Energy en Nottingham, el principal cometido de White Rose Energy en Leeds consiste en suministrar un servicio honesto a un precio sin fines de lucro y otorgar a los clientes todo el protagonismo de su actividad. Our Power, en Glasgow, también surgió a partir de una alianza entre varias asociaciones de vivienda social y el Gobierno escocés, con el objetivo de garantizar unos servicios asequibles.

5. A las autoridades locales, a la postre, les resulta más barato retomar el control de los servicios

Uno de los principales argumentos que esgrimen los partidarios de las privatizaciones y los partenariados público-privados (PPP) es que sus soluciones son, en teoría, más baratas y más rentables que la gestión pública. Sin embargo, la realidad de la práctica ha demostrado, una y otra vez, que este es un falso supuesto. La contratación de una compañía privada para prestar un servicio implica costes extraordinarios porque esta debe mantener la transferencia de efectivo a su sociedad matriz y a los accionistas. En el ámbito de las infraestructuras, las PPP entrañan un alto nivel de complejidad que resulta beneficioso para los bufetes de abogados y los auditores, pero que resulta muy poco provechoso para la ciudadanía. Las experiencias de muchas ciudades han acabado con el mito de que los servicios

gestionados de forma interna cuestan más.

Cuando París remunicipalizó el agua, en 2010, el nuevo operador pudo aplicar un recorte inmediato de los costes de 40 millones de euros: la suma de dinero que cada año extraían del operador privado las empresas matrices. En Newcastle, la modernización del sistema de cableado de fibra óptica y señalización corrió a cargo de un nuevo equipo interno y tuvo un coste de unos 11 millones de libras esterlinas (12,4 millones de euros), frente a los 24 millones de libras (27 millones de euros) que hubiera costado en caso de que se hubiera encargado una compañía privada.

La ciudad de Bergen, en Noruega, que retomó la gestión de dos centros para el cuidado de personas mayores, logró un superávit de 500 000 euros, incluso aunque se habían previsto unas pérdidas de un millón de euros. Chiclana, en el Estado español, asumió la contratación municipal de 200 trabajadores y trabajadoras de tres servicios públicos y, aún así, el municipio prevé que ahorrará entre un 16 y un 21 % de presupuesto. En León, también en el Estado español, la remunicipalización ha supuesto que el coste de los servicios de recogida de residuos y limpieza haya disminuido de 19,5 a 10,5 millones de euros anuales, y que se haya ofrecido un contrato público a 224 personas. En pocas palabras: si se acaba con el traspaso de fondos a los accionistas privados, el dinero de los impuestos se puede usar con eficacia para prestar unos servicios públicos de calidad.

6. La (re)municipalización promueve servicios públicos mejores y más democráticos

Las iniciativas remunicipalizadoras rara vez entrañan únicamente que la estructura de la propiedad pase del ámbito privado al público. En realidad, se trata, ante todo, de (re)crear unos mejores servicios públicos para todos y todas. Para ello, es importante recuperar los valores del servicio público, una cultura de acceso universal a precios asequibles, y asegurar unos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con respecto a las autoridades municipales y la ciudadanía, en lugar de centrarse solo en los elementos más lucrativos del servicio. Este es el motivo por el que varias ciudades británicas han creado nuevas empresas municipales de energía: olvidarse de los accionistas privados, los dividendos y las primas, y centrar el acceso a la energía en los hogares más pobres.

Los servicios públicos remunicipalizados suelen implicar que se desarrollen nuevas formas de participación por parte de la plantilla y la ciudadanía. Por ejemplo, los nuevos operadores de agua de París, Grenoble y Montpellier están tomando decisiones junto con la ciudadanía sobre la reforma y el funcionamiento de los servicios. La cooperación a tres bandas, en la que los sindicatos, el municipio y los políticos locales dialogan para resolver los problemas del lugar de trabajo tienen un sólido historial en lo que se refiere a la mejora de los servicios públicos. La democratización de los servicios públicos es también un elemento clave del movimiento remunicipizador en el Estado español, que nació después de la crisis financiera mundial, a raíz de la resistencia contra los desalojos de viviendas y los cortes de agua y electricidad.

Por último, la remunicipalización suele ser un primer paso hacia la creación de los servicios públicos del futuro: unos servicios sostenibles y anclados en la economía local. Un buen ejemplo de ello se puede encontrar en las ciudades y los pueblos europeos que se han fijado el objetivo de “residuos cero” con su servicio remunicipalizado de residuos, o proporcionar menús 100 % ecológicos y locales en sus comedores escolares remunicipalizados.

7. Las (re)municipalizaciones ofrecen 835 razones más para luchar contra los acuerdos de comercio e inversión

Las 835 experiencias recientes de (re)municipalización de los servicios públicos en todo el mundo ofrecen 835 razones más para no ratificar el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) entre la Unión Europea y Canadá, o cualquier acuerdo parecido de comercio e inversión. Las cláusulas de protección de las inversiones que suele incluir la mayoría de acuerdos de este tipo, un mecanismo que se conoce como “solución de controversias entre inversores y Estados” (ISDS), suponen un alto precio a pagar cuando se desea desprivatizar un servicio y remunicipalizarlo, ya que el objetivo principal de estos acuerdos internacionales es proteger las ganancias de los inversores privados extranjeros.

El caso de Lituania, mencionado arriba, ilustra cómo la decisión de una ciudad de remunicipalizar la calefacción urbana desencadenó una demanda arbitral ISDS. La trayectoria de la protección de las inversiones revela que varios países han sido demandados y multados con cientos de millones de dólares cuando han decidido poner punto final a los proyectos de privatización con el fin de salvaguardar el interés general. En Bulgaria, la simple amenaza de que se recurriría a este mecanismo de arbitraje fue suficiente para socavar los planes del Gobierno de organizar un referendo sobre los servicios de agua en la capital, Sofía. Cuando una demanda ISDS se resuelve a favor de los inversores, los costes se cubren con el dinero que los contribuyentes aportan a los presupuestos públicos, con lo que se puede limitar la asequibilidad de los servicios públicos y aplazar unas inversiones muy necesarias. Nuestro estudio revela que la

decisión de desprivatizar un servicio público ha desencadenado al menos 20 casos de arbitraje internacional (diez en el sector del agua, tres en la energía, tres en el transporte y cuatro en las telecomunicaciones).

Las ciudades cada vez son más conscientes de que el actual régimen de comercio e inversión —y en particular elementos como el ISDS— limitan gravemente el espacio normativo de los gobiernos locales para asumir o recuperar el control de los servicios y los recursos locales. Y cada vez que sale adelante una nueva experiencia de remunicipalización, se añade una razón más a las 835 ya existentes para oponerse al ISDS.

8. Lecciones aprendidas: ante todo, no privatizar

El aumento en el número de remunicipalizaciones refleja la realidad de que muchos proyectos de privatización y de partenariado público-privado (PPP) no cumplen lo prometido. Muchas veces, la iniciativa de remunicipalizar un servicio representa una respuesta colectiva de las autoridades locales y la ciudadanía frente a los problemas que generan las privatizaciones y los PPP.

En el capítulo 7, la Red Europea sobre Deuda y Desarrollo (Eurodad) advierte sobre las falsas promesas económicas de los PPP. Este tipo de contratos se presentan a las autoridades locales y nacionales, incluidos los Gobiernos del Sur Global, como una manera fácil de financiar infraestructuras públicas sin tener que solicitar créditos o vaciar las arcas del Estado para conseguir las inversiones de capital necesarias. Los autores demuestran que los PPP representan, en realidad, una forma oculta de deuda y que, en última instancia, a las autoridades públicas les salen más caras en el largo plazo. Los PPP están concebidos para crear un espejismo de asequibilidad y ocultar costes y responsabilidades reales, lo que hace más fácil convencer a las autoridades de que emprendan unos proyectos a gran escala que no responden necesariamente a las necesidades de la población. Por el contrario, el proyecto de clínicas públicas en Delhi, mencionado arriba, demuestra que es posible poner en marcha soluciones rentables que aseguren un acceso universal a la atención básica de salud.

Otra lección clave de la experiencia internacional es que, muchas veces, es increíblemente difícil modificar un contrato privado o renunciar a él. Una vez firmado, los proveedores privados pueden blindar las condiciones contractuales, y cualquier cambio que se introduzca después supone un gran coste para las autoridades públicas. Y cuando se trata de rescindir un contrato, o incluso de no renovar uno que haya vencido, las autoridades locales y nacionales suelen enfrentarse a una ardua batalla.

9. La (re)municipalización brinda la oportunidad de crear estructuras de propiedad pública innovadoras, diversificadas y democráticas

Los servicios públicos no son perfectos por el simple hecho de ser públicos, sino que también deben mejorar y renovar permanentemente sus compromisos con la sociedad. Si ampliáramos nuestra definición de “público”, englobaríamos una mayor diversidad de iniciativas desprivatizadoras. Sin embargo, las líneas que marcan nuestro estudio es que los fines no sean lucrativos y la proximidad local, y no solo la presencia de actores estatales o no estatales.

Muchos casos de remunicipalización y creación de nuevas empresas públicas brindan la oportunidad de renovar los compromisos públicos y crear un espacio en el que diversos actores gestionen de manera conjunta la prestación de servicios esenciales. Estas experiencias trascienden la estructura clásica de la propiedad pública para abarcar toda una serie de nuevos modelos: empresas municipales de energía que cooperan con la energía comunitaria (por ejemplo, en Hamburgo, Bristol y Boulder), organizaciones y redes intramunicipales (por ejemplo, servicios de agua en Francia y el Estado español), empresas locales de servicios públicos que son propiedad parcial de la plantilla (por ejemplo, la empresa de agua de Buenos Aires) y cooperativas de usuarios (Wind Middelgrunden en Copenhague), proveedores de cooperativas ciudadanas con plena licencia para la prestación de servicios (isla de Kauai y Minnesota), alianzas con autoridades locales (Glasgow, Escocia), etcétera. Todos estos son posibles modelos de cómo podría ser la propiedad pública en el futuro.

El fuerte impulso remunicipizador en Cataluña también surge de un movimiento de plataformas ciudadanas que no solo desean que se recupere la gestión pública como un fin en sí mismo, sino que consideran que este sería un primer paso hacia una gestión democrática de los servicios públicos con una continua participación ciudadana. La ciudad de Terrassa remunicipalizó los servicios de agua en 2016 y la plataforma ciudadana que promovió esta medida sigue participando en el diseño del nuevo servicio público. La plataforma ciudadana y algunos concejales crearon el Parlamento Ciudadano de Terrassa y aprobaron dos mociones que se presentaron ante el Ayuntamiento con la idea de que la recuperación del agua pública sea también un paso hacia la gestión del agua como bien común. El éxito de la remunicipalización de Terrassa y la puesta en marcha de un nuevo modelo de gestión, con una participación

ciudadana eficaz, será una punta de lanza importante para muchas otras ciudades catalanas y españolas.



10. Las ciudades y los grupos ciudadanos que apuestan por la remunicipalización están colaborando y tejiendo redes

Las iniciativas remunicipalizadoras también ponen de manifiesto que las ciudades y los grupos locales no son los únicos que desean construir unos servicios públicos eficaces, progresistas y democráticos. Las experiencias de éxito inspiran a otras autoridades locales a seguir el ejemplo y las empoderan para hacerlo. Vemos ciudades y grupos sumando fuerzas dentro de cada sector, en cada país, y a escala europea e internacional; y todos ellos están contrarrestando la influencia y las trabas de las grandes empresas y los Gobiernos centrales.

Así, están floreciendo distintos modelos de partenariados público-públicos. Lo vemos en la forma en que las ciudades y la ciudadanía han unido fuerzas en Alemania y otros países para impulsar una auténtica transición energética. La nueva empresa municipal de energía de Nottingham catalizó experiencias parecidas en otras ciudades que, finalmente, culminaron con la creación de una asociación común. Las redes francesas y catalanas de operadores públicos de agua aglutinan recursos y conocimientos, y colaboran para hacer frente a los retos de la remunicipalización. Más de 200 municipios noruegos practican la cooperación a tres bandas, junto con los sindicatos, para que los servicios públicos sean eficientes y democráticos. Más de 2300 ciudades de toda Europa se han unido para oponerse al acuerdo de libre comercio TTIP entre los Estados Unidos y la UE, así como a acuerdos similares, basados en políticas de liberalización y privatización. La coalición progresista Barcelona en Comú y muchas otras coaliciones afines en el Estado español han articulado una visión “municipalista” global en la que practican diversas formas de democracia participativa directa y trabajan de forma pragmática para encontrar soluciones a desafíos mundiales.

El resurgimiento de la (re)municipalización ofrece una oportunidad importante para que la ciudadanía y los trabajadores y trabajadoras recuperen el control democrático que se ha visto menoscabado por las privatizaciones en las últimas décadas. Cada vez hay pruebas más sólidas de que la gente es capaz de recuperar los servicios públicos y dar paso a una nueva generación en la estructura de la propiedad pública. Por suerte, este impulso está cobrando una fuerza creciente, en un momento en el que diversos movimientos y actores se alían para lograr cambios positivos en

nuestras comunidades.

[1] Empleamos el término “remunicipalización” para aludir al proceso por el que se recupera el control y la gestión públicos a escala local de servicios que antes estaban privatizados o se prestaban de forma privada. Somos conscientes de que no siempre es el término más adecuado, ya que, en algunos casos, los servicios recuperados siempre han estado en manos privadas o simplemente, no existían. En estos casos, sería más apropiado hablar de “municipalización”. El término “(re)municipalización” abarcaría ambos casos. Se encuentran también ejemplos de servicios públicos que se han desprivatizado a nivel nacional. Estas “renacionalizaciones” o “restatalizaciones” las tratamos por separado, con el fin de centrarnos en las acciones locales y también porque algunas formas de renacionalización (cuando entrañan, por ejemplo, centralizar el poder o rescatar de forma temporal una compañía privada que ha quebrado) no entran en el ámbito de nuestra investigación.

Por último, encontramos numerosos ejemplos en los que ciudadanos y usuarios están tomando la iniciativa y recuperando servicios esenciales que antes prestaban entidades comerciales para gestionarlos sin ánimo de lucro y en pro de sus comunidades. Para nosotros, estos casos también podrían catalogarse como una (re)municipalización, en la medida en que comparten valores de servicio público y objetivos no comerciales. El término “desprivatización” se usa para aludir, en general, a la (re)municipalización, la renacionalización y las iniciativas ciudadanas para recuperar los servicios, que persiguen, en última instancia, acabar con los problemas de las privatizaciones.